



Reforma electoral no pretende debilitar al INE ni conduce al autoritarismo: CSP

Por Redacción/El Independiente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este miércoles el proyecto de reforma electoral que su gobierno enviará al Congreso, al asegurar que no pone en riesgo la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) ni conduce al autoritarismo, sino que busca fortalecer la democracia, reducir el alto costo de los procesos electorales y ampliar la participación ciudadana.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que la propuesta se encuentra aún en etapa de discusión y será objeto de debate legislativo, pero dejó claro que uno de sus ejes centrales es racionalizar el gasto electoral, ya que las elecciones en México se encuentran entre las más caras del mundo. “No tiene por qué ser así”, afirmó, al señalar que la reducción de costos aplicaría tanto a los partidos políticos como al propio INE, sin menoscabar su independencia.

Sheinbaum insistió en que la reforma no pretende debilitar a la autoridad electoral. “No se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar”, enfatizó, al tiempo que rechazó los señalamientos de la oposición sobre una supuesta intención autoritaria. Aseguró que el objetivo es fortalecer la representación popular y la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Otro de los puntos planteados es la revisión del mecanismo de representación proporcional en el Congreso. La presidenta aclaró que no se eliminarán los llamados plurinominales ni se limitará la pluralidad legislativa, pero sí se busca modificar la forma en que se eligen, para evitar que sigan siendo definidos por listas cerradas elaboradas por las cúpulas partidistas. “Que no sean estas listas que nunca van a buscar el voto con la gente”, señaló. Adelantó que la iniciativa formal podría presentarse en las primeras semanas de febrero.

VIOLENCIA EN SINALOA HA DISMINUIDO EN LOS ÚLTIMOS MESES

En materia de seguridad, la jefa del Ejecutivo federal abordó la situación en Sinaloa y afirmó que la violencia en la entidad ha disminuido en los últimos meses, luego del repunte registrado tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, ocurrida en julio de 2024.

Sheinbaum explicó que los hechos violentos estuvieron relacionados con la pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente entre el grupo de “Los Mayos” y otras células criminales.

La presidenta reiteró que persiste la falta de claridad sobre cómo se concretó la detención y traslado de Zambada a territorio estadounidense, luego de que fuera entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Recordó que, durante el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México solicitó información a Estados Unidos sobre ese operativo, sin obtener una explicación completa.

Sheinbaum sostuvo que su administración busca evitar que estos conflictos criminales afecten a la población civil y descartó una estrategia de confrontación militar, al considerar que ese modelo, aplicado durante el sexenio de Felipe Calderón, solo generó más violencia. En contraste, defendió la actual estrategia basada en detenciones en el marco de la ley y en la atención a las causas, con políticas sociales orientadas a impedir que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado.

En este contexto, informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encuentra en Sinaloa para supervisar directamente la estrategia de seguridad y evaluar las acciones necesarias. La presidenta aseguró que, además de la reducción de homicidios, su gobierno ha logrado disminuir la producción de drogas y dismantelar numerosos laboratorios clandestinos.

EN EL CASO EPSTEIN, MÉXICO SÓLO PARTICIPARÍA SI SE LE SOLICITA

Finalmente, la mandataria fue cuestionada sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein, luego de la difusión de nuevos documentos en Estados Unidos que mencionan a diversas figuras internacionales, entre ellas algunos personajes mexicanos. Al respecto, Sheinbaum aclaró que se trata de una investigación que corresponde a las autoridades estadounidenses y que México solo participaría si ese país solicita formalmente su colaboración.

Con ello, la presidenta dejó claro que su gobierno mantendrá una postura de respeto a los procesos judiciales internacionales, al tiempo que reiteró su disposición a cooperar en el marco de la ley y de los acuerdos bilaterales vigentes.